

ANÁLISIS



ACUERDO ARGENTINA - FMI

- MARZO 2022 -



#PATRIA O FMI: UN ACUERDO DONDE NO ESTÁN TODOS

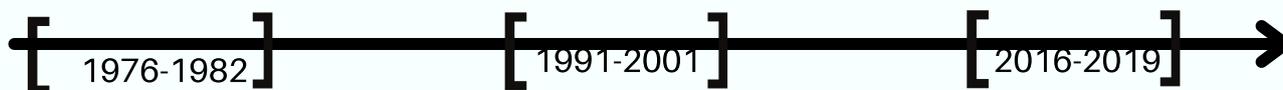
A los fines de comprender nuestra realidad, buscamos realizar una síntesis de los principales acontecimientos vinculados al conflicto en relación a la deuda externa (tenedores privados de deuda y FMI), partiendo de un análisis histórico de la relación entre las deudas y el estado.

Continuando con la política de gobierno macrista en relación al proceso de valorización financiera, endeudamiento y fuga de capitales.

Con el fin de develar la estrategia desestabilizadora de los mercados, sobre todo en el marco del contexto preelectoral, y de la tensión agudizada sobre la vía a seguir en relación a la deuda con el FMI. Maniobras del poder financiero, operaciones mediáticas, movimientos de calle, la no aprobación del presupuesto por parte de la oposición y finalmente la votación de un acuerdo con el FMI (que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados).

VALORIZACIÓN FINANCIERA Y LAS CRISIS ARGENTINAS

La fuga de capitales es una maniobra necesaria de la valorización financiera, devenida en el régimen social de acumulación de las riquezas (es decir, en modelo económico) del neoliberalismo criollo en sus tres ciclos: 1976-1982, 1991-2001 y 2016-2019.



Entre las principales consecuencias se encuentra la desinversión en la capacidad productiva nacional y un proceso regresivo en la distribución del ingreso. Para este modelo económico, el Estado se convierte en el promotor de la desregulación económica y en el garante de las divisas extranjeras que las inversiones especulativas requieren antes de la fuga del país, vía el endeudamiento con los organismos internacionales, que actúan siempre en complicidad y persiguiendo objetivos geopolíticos y estratégicos.

De esta manera, se explica el rol principal que desempeña la fuga de capitales como clausura de los períodos de valorización financiera y endeudamiento público, y las crisis sociales que alimentan.

En términos de clases, el régimen de acumulación vía valorización financiera de los períodos Martínez de Hoz (Dictadura cívico-militar) y Cavallo (Menem y De La Rúa) fue articulada y promovida por actores y cuadros provenientes de los grupos oligopólicos locales, en alianza con sectores de la banca de inversión, de origen angloamericano.



Durante este período, la fuga de capitales constituyó un fenómeno permanente. **Para 1995, 11.455 millones de dólares fueron fugados de Argentina, marcando un aumento del 583 % en comparación con el año anterior.** Así para el año 2001, el stock de activos financieros externos del sector privado representaba cerca del 40% del PIB en el caso de la Argentina, alcanzando máximos históricos (Kulfas, 2007).

En cuanto a deuda, durante los 10 años anteriores a la crisis, la Argentina firmó cuatro acuerdos sucesivos de financiamiento y hubo un aumento constante del saldo del crédito pendiente frente al FMI. En esos años **el FMI realizó cerca de 50 misiones entre 1991 y 2002, principalmente en los sectores fiscal, monetario y bancario.** Las condiciones impuestas por el FMI de aquella época eran: reducción del déficit fiscal, imponer políticas de ajuste, reducir el protagonismo activo del Estado en la economía y realizar reformas estructurales al mundo del trabajo (vía reforma al sistema jubilatorio y la flexibilización laboral).

La crisis de 2001 produjo la explosión económica y social tras la política neoliberal de desindustrialización, endeudamiento con organismos internacionales y desguace del Estado para el sostenimiento de la valorización financiera, con una recesión económica que empezó, al menos, en 1998.

Tras la rebelión popular y la renuncia de Fernando De La Rúa en diciembre de 2001, la suspensión del pago de la deuda externa de Adolfo Rodríguez Saá y la devaluación (“pesificación asimétrica”) de Eduardo Duhalde rompieron el modelo de la convertibilidad. La masacre del puente Avellaneda en junio de 2002 determinó que la disputa abierta de proyectos, entre el neoliberalismo (y su plan de dolarización definitiva) y el neodesarrollismo (y su propuesta de devaluación para reactivar la producción), se dirima en elecciones.

El triunfo de Néstor Kirchner en abril de 2003 consolida el camino productivista emprendido por Duhalde y, a partir de 2008, será profundizado con una diversificación industrial con protagonismo estatal, en lo que conocemos como la “Década ganada” de la mano del gobierno de Nestor y los 2 posteriores de Cristina Fernandez.

Dichos períodos sufrieron el ataque de los llamados “fondos buitres” (holdouts) tras los exitosos procesos de negociación de quita de deuda pública de los gobiernos kirchneristas, celebrados en 2005 y 2010, que habían significado una aceptación de casi el 93% de los tenedores de deuda argentina.

Al asumir Macri como presidente en seis días de gobierno, el ministro de finanzas,



Alfonso Prat Gay (cuadro de la Banca Morgan), resolvió la “eliminación del cepo cambiario”, desatando una repentina devaluación de la economía argentina en casi un 40%.

En 2016 llegaría el macrismo, que en abril de ese mismo año consiguió los votos necesarios para que el Congreso argentino aprobara el pago a los Fondos Buitres. La reinstalación del régimen de la valorización financiera nunca había sido tan rápida. A estas medidas se sumó el festín de bonos en la bicicleta financiera (carry trade), con las LEBAC´s y las LELIQ´s como negocios mucho más rentables que la producción de soja.

Según un informe del BCRA, 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país entre diciembre de 2015 y 2018 tuvieron su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. Argentina volvió a emitir deuda en moneda extranjera y, con eso, volvió a darle poder de fuego en la economía doméstica a los Fondos Financieros de Inversión Global (FFIG).

Así se desarrolló la fase de ingreso de capitales (2016- 2018) del ciclo de valorización financiera, en el cual **el Tesoro Nacional emitió hasta febrero de 2018 U\$S 108.173 millones de deuda (U\$S 76.032 millones en moneda extranjera)**, convirtiéndose en el mayor emisor de deuda soberana entre los países emergentes.

Los “mercados”, el eufemismo televisivo para el gran capital transnacional, terminaría por disolver su confianza en el macrismo con tres corridas bancarias en abril, junio y agosto de 2018. En mayo de 2018, el BCRA perdió 5000 millones de dólares en una semana. Fiel al recetario neoliberal, el macrismo recurrió al FMI para garantizar un “seguro de cambio” de 57 mil millones de dólares. La jugada fue sencilla. El gobierno argentino pondría los dólares necesarios para que las inversiones especulativas puedan irse del país.



Entre agosto y octubre de 2019, las elecciones primarias y las generales, ocurrió una nueva corrida cambiaria con una brusca devaluación. En ese marco, **se produjo una pérdida de reservas de 17.000 millones y se fugaron 23.000 millones de dólares**, casi la mitad del monto del préstamo otorgado por el FMI.

El ciclo se cerró con la imposición de un fuerte control de cambios, con restricciones y cupos a la compra de dólares, anunciadas por Macri y efectivizadas por Sandleris, ex titular del BCRA. La alianza Cambiemos recibió un país desendeudado en diciembre de 2015 y entregó uno completamente saqueado y en ruinas en diciembre de 2019. ¿Qué hubo en el medio? Un ciclo de valorización financiera.

De acuerdo al Balance Cambiario del Banco Central (BCRA), **en 2019 la fuga de capitales alcanzó los U\$S 26.870 millones de dólares**, siendo la segunda más importante de la historia luego del récord del propio Macri en 2018, cuando se fueron del sistema nacional U\$S 27.230 millones de dólares. Si se suma **todo el período macrista, la fuga habría sido de U\$S 88.371 millones**, un monto cercano al de la deuda en dólares tomada por el Gobierno.

Para entender la magnitud del saqueo en números: Según el BCRA, **“el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas de dólares adquirió US\$ 41.124 millones en concepto de formación de activos externos y, en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló US\$ 16.200 millones en compras netas durante el período, un total combinado de US\$ 57.324 millones”**. Esa fuga fue, impunemente, a parar a paraísos fiscales.



República de Panamá

ARGENTINA, DOS FUERZAS EN DISPUTA

En el libro “Más allá de los Monstruos”, publicado en junio de 2019, afirmamos que “en Argentina se encuentran potencialmente constituidas dos Fuerzas Sociales con vanguardias políticas-organizativas medianamente diferenciables, capacidad de movilización, programa político, e intereses contrapuestos”. Esas Fuerzas, constituidas desde el alineamiento de actores que se visualiza a través del seguimiento del conflicto social, se han mantenido prácticamente inalteradas desde diciembre de 2017, cuando la reforma al mundo del trabajo que impulsaba el macrismo fueron derrotadas políticamente por un fuerte, masivo y heterogéneo movimiento de protesta conformó a un bloque unificado de oposición política que sería sintetizado institucionalmente en el Frente de Todos. Lo que sí cambió, por supuesto, fue el lugar en las posiciones institucionales, con el triunfo electoral de la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Una de las Fuerzas, a la que podríamos denominar Nacional y Popular, sintetizada en el Frente de Todos, se personifica en los principales actores del kirchnerismo y el albertismo, con toda su heterogeneidad de identidades y posiciones. Su activismo principal se encuentra en las organizaciones populares sindicales, sociales y feministas, y ensaya alianzas con sectores económicos variados, como la Mesa Pyme (integrada al variado movimiento popular) y a actores económicos de peso, con los que, en muchos casos, construye alianzas tácticas coyunturales débiles, como es el caso del Consejo AgroIndustrial Argentino (CAA), conducido por las Bolsas de Cereales y la fracción minoritaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), representada en Eduardo Acevedo (Aceitera General Deheza).

La otra Fuerza, definible como Neoliberal y Antipopular, es representada en la política institucional por la Coalición Juntos, bajo conducción del partido macrista Propuesta Republicana (PRO), en alianza con otros partidos como el conservador Unión Cívica Radical (UCR) y la Acción por la República (ARI, de Elisa Carrió). La misma ha trazado una alianza estratégica con la poderosa Asociación Empresaria Argentina (AEA), expresión del empresariado “local” con fuertes conexiones al gran capital transnacional de origen angloamericano, cuya conducción está en manos del Grupo Clarín (Héctor Magnetto, multimedios), Techint (Paolo Rocca, siderurgia), Mercado Libre (Marcos Galperín, comercio electrónico), Cristiano Ratazzi (FIAT Argentina, automotriz), Arcor (Luis Pagani, alimentos) y Pan American Energy (Alejandro Bulgheroni, energía), entre otros. También tiene el apoyo de las fracciones mayoritarias de la Mesa de Enlace de las patronales agropecuarias, el sector mayoritario de la UIA, representada en su actual presidente

Daniel Funes de Rioja, y del Foro de Convergencia Empresarial, que básicamente es la articulación de AEA con la Asociación de Bancos de la Argentina - ABA, que nuclea los Bancos Privados Extranjeros (Santander, HSBC, BBVA, ICBC, JP Morgan, Itaú, Patagonia, entre otros), las Cámaras Nacionales de distintos sectores (de la construcción, la industria, el agro, la minería, la hotelería, las comunicaciones e informática, entre otros), y de Comercio de distintos países en Argentina (Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, España, Francia, Italia, Suecia, Brasil, Chile), y una serie de think tanks como la Fundaciones Mediterránea (desde donde surgió Domingo Cavallo), Libertad (capítulo argentino de la red internacional neoconservadora ATLAS) y la DAIA-AMIA (Asociaciones Israelitas de Argentina). En síntesis, está articulada a las principales personificaciones visibles del poder fáctico.



También se pueden explicar “los matices” de la coalición de gobierno. En tal sentido, pareciera, que la línea de intereses estratégicos dominantes en el gobierno argentino promueve un alineamiento de nuestro país a la alianza estratégica que el Vaticano (como actor político, pero también económico) tiene con la actual administración de la Casa Blanca del católico Joe Biden, hegemonizada por el proyecto estratégico globalista del capital de origen angloamericano.

A riesgo de pecar de esquemáticos, la línea estratégica que promueve dicho alineamiento involucra las actuaciones del Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, del Canciller, Santiago Cafiero, y del Ministro de Economía, Martín Guzmán. En la misma sintonía, aparece el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y, sin ser lo mismo, el Presi-



dente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, junto a otros varios ministros y secretarios de Estado. La base social que le presta apoyo tiene al sector de la Confederación General del Trabajo (CGT) identificado con dos de los miembros de su triunvirato, Héctor Daer y Carlos Acuña, y el Movimiento Evita, la fuerza principal de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La otra línea de intereses estratégicos aparece representada en Cristina Fernández y el núcleo que la acompaña en el gobierno. El mismo apuesta por la rearticulación de un bloque general de poder a través del sostenimiento de la CELAC y la reactivación de la UNASUR, siempre en un entendimiento más decidido con China y Rusia. Dicha línea controla el grueso del poder legislativo del Frente de Todos y, a través del gobernador Axel Kicillof, a la Provincia de Buenos Aires, el principal distrito económico y político del país. La fuerza social que le presta apoyo tiene al sector identificado con Pablo Moyano dentro triunvirato de la CGT, a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-T), al Frente Patria Grande (Juan Grabois) de la UTEP y a la denominada “fuerza propia” de La C mpora (M ximo Kirchner) y dem s actores de “Unidad Ciudadana”.



EL GOBIERNO DEL FRENTE DE TODES FRENTE AL ENDEUDAMIENTO

Después de realizar una historización del endeudamiento argentino desde el 1976, en tiempos de Martínez de Hoz hasta el desendeudamiento de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, **la vicepresidenta denunció en Cuba, la deuda tomada por Macri en 2018 como insostenible e ilegítima, basada en una demostrada violación de los estatutos del Fondo y la utilización de dicha deuda sólo para la fuga de capitales.**

El mismo Macri lo reconoció el 7 de diciembre de 2021, al señalar: “la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo”. También lo hizo el propio FMI, de la mano de Odd Per Brekk, vicejefe del departamento de Asia y Pacífico del organismo, quien el 22 de diciembre pasado lanzó un informe en el que reconoce también que el préstamo otorgado durante 2018 no fue utilizado para los fines convenidos (Diario *Ámbito*, 22/12/2021).

Tras el triunfo electoral del Frente de Tods en 2019, la primera gran decisión del gobierno fue la suspensión del último giro del préstamo del FMI. La deuda quedó valuada en 44 mil millones de dólares.

El nuevo gobierno tenía plena conciencia de que el nudo de los problemas económicos heredados por la implementación del ciclo macrista de valorización financiera estaba en el feroz endeudamiento con dos grandes frentes:

A- Con los tenedores privados de títulos de deuda pública del país.

B- Con el FMI, que operó como un garante de la fuga de capitales especulativos.

En agosto de 2020, en el marco de la crisis de la Pandemia Mundial del Covid-19, el ministro de economía Martín Guzmán cerró una negociación con los tenedores privados de la deuda pública argentina, pagando con una sustancial quita de unos U\$S 45 por cada U\$S 100 de deuda nominal. Con apoyo del FMI, las rondas de negociación culminaron con el anuncio de Guzmán, el 31 de agosto, de un acuerdo con el 99% de los acreedores de deuda bajo Ley extranjera. Este hecho fue el que condiciona el acuerdo con el FMI cerrado recientemente en enero de 2022. Para tal negociación, el organismo internacional ofició de garante. Desde allí en adelante, es difícil eludir que las grandes decisiones de política económica del Palacio de Hacienda no hayan sido realizadas en un entendimiento con el Fondo o, al menos, con su conocimiento.

La magnitud de la deuda argentina, que absorbió por sí sola el 60% de la cartera de

préstamos del FMI, no resulta un tema menor para la propia supervivencia del organismo en una nueva situación internacional con el ascenso financiero de China a nivel global. En tal sentido, no resulta descabellado pensar que la actual administración de la Casa Blanca haya maniobrado, en los últimos meses, “en favor” de la Argentina, sabiendo que un “no entendimiento” con la tercera economía latinoamericana puede repercutir negativamente en el conjunto de su “patrio trasero”.

Los actores financieros pusieron en juego sus herramientas de desestabilización, en lo que puede interpretarse como una carrera preelectoral de los mercados hacia las elecciones generales de noviembre. El 19 de octubre, el riesgo país tocó un máximo de 1652 puntos, superando el último récord de septiembre de 2020. Los bonos argentinos en Wall Street perforaban el piso de los U\$S 35 y el dólar blue aumentaba la brecha cambiaria.

En el medio, sucedieron las dos movilizaciones más grandes del período, las “dos plazas” en el marco de la celebración del 17 de octubre, con el sector del kirchnerismo “duro” movilizándolo el mismo 17 con el “no pago al FMI” como consigna y, al día siguiente, el 18, marcha el sector más “moderado”, con la CGT y el Movimiento Evita como principales protagonistas, que sostienen la consigna de acuerdo pero con condiciones a favor de las y los trabajadores.

Los medios hegemónicos pusieron en el centro de la escena a Máximo Kirchner, conducción de La Cámpora, quien realizó varios actos preelectorales y viralizó la consigna **“primero se crece, después se paga”**.



Cristina Kirchner, volvió a romper el silencio el 27 de noviembre. En una carta publicada por Twitter, con centralidad en las operaciones mediáticas sobre su papel en las negociaciones con el Fondo. Bajo el título “De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades”, expresó que “la lapicera no la tiene Cristina... siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación”. Pero aclaró: “¡Y ojo! Que nadie está hablando de desconocer deudas. (...) Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. No lo voy a hacer. Antes me voy a mi casa, porque no tendría realmente cara para entrar en esa sala si hiciera algo semejante”.

Si bien este era el marco internacional de la negociación, a nivel nacional el contexto era de debilidad por la derrota electoral de medio término en noviembre de 2021, la extorsiva corrida cambiaria abierta en enero, la brecha superior al 100% entre el dólar oficial y el ilegal, y la alarma encendida por el retiro de depósitos en dólares de los bancos, que oscilaba entre U\$300 y U\$500 millones en los primeros 20 días del año, aceleraron los tiempos del acuerdo.

LA LETRA CHICA DEL ACUERDO

El reciente acuerdo del presidente Alberto Fernández con el FMI no es un problema sólo económico. Es una convalidación y una profundización de las decisiones de política económica, que se pusieron en marcha en agosto de 2020, cuando el propio organismo fue garante de la negociación de Argentina.

En enero de 2021, el ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmaba que reducirían las necesidades de financiamiento del Banco Central y que buscarían poner las cuentas fiscales en orden.

No hay quitas de capital ni de interés, incluida la polémica sobretasa. Esto otorga un manto de impunidad a dos puntas: a las por entonces autoridades del FMI y a los principales cuadros del gobierno macrista. Hay que tener en cuenta que todavía los memorandos de las políticas económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y el FMI están en pleno proceso de escritura. La “letra chica” que más preocupa está en los siguientes puntos que pasamos a detallar:

1) Déficit fiscal:

El acuerdo prevé una reducción progresiva del déficit fiscal. Se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI para el año 2022, 1,9% para 2023 y 0,9% para 2024. Si bien es



cierto que es un objetivo loable en materia de política económica, una reducción del déficit de este nivel y velocidad, para la situación de la Argentina actual, implica centrar la mirada en las importaciones y en seguir conteniendo el ingreso al país de bienes de capital necesarios para una reactivación del crecimiento industrial, la generación de empleos de calidad y la promoción de una redistribución del ingreso positiva entre Trabajo y Capital.

Del lado exportador, la cosa está aún más difícil. La reprimarización de la economía fue una premisa del programa económico del macrismo, quienes públicamente hablaban del "Modelo Australia", es decir, una economía agraria de alto valor agregado para el mercado de consumo del norte global. La cumplieron, como era de prever, a medias, acentuando la dependencia de la exportación a granel de cereales y oleaginosas. Además, paralizaron el Mercosur y los acuerdos con terceros países en los que Argentina había logrado colocar bienes de consumo y de capital (maquinaria agrícola, industria del software) de origen industrial.

En síntesis, priorizar la reducción del déficit implica poner una traba al despliegue del propio crecimiento económico que se necesita para quebrar la inercia de una economía que puede funcionar con el 40% de pobreza y un desempleo de dos dígitos.

Como un "haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago", el déficit presupuestario de Estados Unidos alcanzó los 2,77 billones de dólares durante el año fiscal 2021, que acabó el pasado 30 de septiembre, el segundo mayor de la historia del país.

Esa cifra supone una mejora respecto a los números del 2020, cuando el país batió el récord de 3,13 billones de dólares de déficit presupuestario. "Como parte de la economía en conjunto, el déficit en 2021 supuso el 12,4% del producto interior bruto (PIB), por debajo del 15% del año fiscal 2020" (Agencia EFE, 22/10/2021). Sólo el entendimiento de las ecuaciones de poder mundial pueden explicar esta exigencia del FMI con la Argentina.



2) Tasa de interés real local positiva con restricción al financiamiento monetario vía BCRA

Se apunta a que en 2022 el financiamiento monetario sea de 1% del Producto; en 2023 alrededor de 0,6% y en 2024 sea cercano a 0 y poder converger en una situación en la cual no haya más financiamiento sistemático del Banco Central al Tesoro.

Es decir, el FMI nos pide aplicar el dogma neoliberal de la "autonomía" del Banco Central. Autonomía del Gobierno, subordinación al gran capital transnacional. El objetivo es tener una estructura de tasas de interés reales que redunde en valores positivos. Tal definición va a, necesariamente, encarecer el acceso al crédito productivo de la banca comercial, incluido el que otorga el Banco Nación y el Banco Provincia de Buenos Aires, por lejos los grandes promotores del financiamiento de Pymes agrarias e industriales.

Todo esto, en un país donde vastos sectores de la burguesía y la pequeña burguesía se han acostumbrado a parasitar en los ciclos de Valorización Financiera una tasa de interés real positiva, que aún sin que se monte el carry trade (o bicicleta), rápidamente se aleja de toda inversión productiva. De conjunto, tal decisión puede espiralizar y alimentar la inflación, la variable con la que las fracciones oligopólicas, centralmente del comercio y la producción de alimentos, operan para captar ingresos de los sectores asalariados, en concordancia con objetivos transnacionales para nuestra economía, que buscan ganancias extraordinarias a costa de un "costo laboral" que no podrían tener en el norte global.

El aumento de la tasa agiganta la bola de nieve de las LELIQ´S. El analista Diego Genoud, recuperando datos de la consultora Econviews, afirma que "los intereses aumentaron \$1,35 billones (2,9% del PBI) durante 2021 y llegaron al 8,8% del PBI". Desarmar esa bomba del ciclo de valorización financiera parece una tarea imposible con estos márgenes de ajuste en la emisión monetaria que Guzmán acordó con el Fondo (1% este año y 0,6% del PBI en 2023).

3) Nuevo financiamiento sin discusión de la estafa macrista y sin eliminación de las sobretasas

Se ha negociado un financiamiento por un equivalente al monto de lo que fue el programa stand by que había acordado el gobierno anterior. Es decir, alrededor de 44.500 millones de dólares.

Por el acuerdo suscripto en 2018, Argentina debe pagar U\$1.000 millones de sobretasa por año. Esa multa, odiosa y costosa, se debe a la decisión política de Macri de aceptar

un Stand-By por U\$557.000 millones, que excede en un 1.300% la cuota societaria que el país tiene como integrante del FMI, que se ubica en torno al 0,67% de las acciones del organismo. En otras palabras, las y los 44 millones de argentinas y argentinos debemos pagar el 100% de la estafa que el macrismo nos impuso en complicidad al FMI y la Casa Blanca.

En su nota de renuncia como jefe del bloque oficialista en Diputados, Máximo Kirchner tuvo en cuenta este punto, al señalar -con justeza- que no aspira "a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional".

El presidente Alberto Fernández trató el tema con Georgieva en la reunión del G20 realizada el pasado mes de octubre en Italia. En las declaraciones que Fernández realizó el lunes 31 de enero, tras la renuncia de Máximo Kirchner, en los estudios de la señal televisiva C5N, ante una pregunta de Gustavo Sylvestre, indicó que "eso se va a tratar en marzo, según me dijo Kristalina Georgieva. Si eso se aprueba, va a beneficiar a la Argentina. Nosotros seguimos insistiendo que esa sobretasa no debe ser cobrada" (Entrevista exclusiva al Presidente Fernández, C5N, 31/01/2022).

Sin embargo, lo indicado por el presidente parece poco probable, si queda fuera del memorándum



que votará el Congreso argentino y el board del organismo. De hecho, el pasado 17 de diciembre el FMI emitió un comunicado sobre el debate celebrado en una reunión de directorio sobre los recursos del organismo, dentro de los que se encuentran los sobrecargos sobre el financiamiento.

En dicho comunicado se indica que algunos directores “estaban abiertos a explorar el alivio de recargos temporales para ayudar a los miembros prestatarios a liberar recursos para abordar los desafíos económicos y de salud que plantea la pandemia”, mientras que otros “no vieron la necesidad de revisar las políticas sobre recargos o cambiar su diseño en esta etapa, dado el bajo costo total general de los préstamos del Fondo” y señalaron “el papel fundamental de los ingresos por recargos para garantizar una acumulación adecuada del riesgo”. Finalmente, “la mayoría de los demás directores expresaron su disposición a una revisión más holística y en el momento apropiado de las políticas de recargos en el contexto del modelo de ingresos del Fondo y las perspectivas financieras generales” (Diario El Cronista, 17/12/2021).

En síntesis, el directorio del Fondo trató el tema a demanda de Argentina y el G20, pero no pareciera muy dispuesto a cuestionarlo, y ni siquiera la crisis sanitaria y económica generada por la Pandemia del Covid-19 es un argumento de peso para revisar, repetimos, “el papel fundamental que juegan los ingresos por recargos para garantizar una acumulación adecuada del riesgo”. Si, se puede afirmar: Para el FMI vale más la usura que la salud de la humanidad.

Existe una fuerza social y política, representada por las figuras de Cristina y Máximo Kirchner, que sí cuenta con el caudal político y electoral para hacer de resorte político y confrontar con el FMI y sus aliados locales, pero que hoy no maneja los resortes institucionales del país. Quienes sí manejan dichos engranajes político-institucionales no pueden (o no quieren) llevar adelante dicha confrontación, por los intereses en disputa que se encuentran representados.

Sabemos que lo económico es lo primero, pero lo político es lo principal. Reconocer la deuda como legítima fue decisión política. Responsabilizar a quienes firmaron una deuda fraudulenta, denunciar las irregularidades y exigir su revisión fueron algunos de los hechos que confirman un camino que marcó Cristina, allá por 2019, en Cuba.

Un camino que el gobierno no transitó. Por eso se hace difícil ver alternativas a la firma del acuerdo. Porque ya estamos jugando en su cancha. La salida, sabemos, no es fácil, pero deberá incluir indefectiblemente apostar a desatar las energías de lucha de la



fuerza social nacional y popular, que ha dado reiteradas muestras en la historia de lo que es capaz cuando pone a funcionar sus engranajes políticos.

LA APROBACIÓN DEL ACUERDO PERO NO DEL PROGRAMA

El día 10 de marzo de 2022, la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley que autoriza al Ejecutivo a sellar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar deudas.

Pero la media sanción lograda ayer por Martin Guzman y su equipo solo autoriza al gobierno a tomar nueva deuda con el organismo pero no acompaña el acuerdo que el gobierno ha realizado con el directorio del organismo.

De esta manera los costos de las decisiones que se tomen desde aquí hacia adelante serán solamente asumidas por el ejecutivo y su equipo más cercano. Lejos estará de la primera intención del ministro que buscaba el apoyo del resto de las fuerzas para llevar adelante un programa planteado como el mejor acuerdo "posible". Es decir, se votó un nuevo endeudamiento con el FMI para pagar el endeudamiento con el propio organismo que el macrismo solicitó como "seguro de cambio" de la fuga de los capitales especulativos. Sin la aprobación de ese programa de política económica, no hay siquiera garantías de las reformas estructurales neoliberales, que tranquilamente podrán ser planteadas a partir de diciembre de 2023.



Tampoco son menores los hechos de represión de la protesta y la violencia que sucedieron en el marco de la votación, cuando la policía reprimió a los manifestantes y el despacho de la vicepresidenta (el único) fue apedreado y atentado como si fuera una especie de mensaje mafioso similares a los ocurridos durante la década neoliberal de los '90. Buscando un chivo expiatorio en las organizaciones de izquierda que ya salieron a desmarcarse del hecho.

Además, para remarcar y tener atención, es la entrevista del 7 de marzo en el canal LN+, brindada por el histórico dirigente radical Enrique "Coti" Nosiglia luego de 32 años de no aparecer en televisión y la respectiva nota que publicó Clarín dos días después sobre ese hecho; donde el dirigente manifestó que desde Juntos por el Cambio debían acompañar el acuerdo y explicó anticipadamente lo que éste implicaba para el país en términos de programa económico. Podemos evidenciar que hay actores económicos, mediáticos y políticos que están tensionando el escenario general para que se traduzca en lo que podría ser un nuevo Pacto de Olivos en busca de una salida neoliberal renovada.

En definitiva, la deuda funciona, así, como estrategia de dominación imperial del territorio social argentino, bloqueando el programa económico que las mayorías sociales edificaron en las calles (con claridad desde diciembre de 2017) y votaron en las urnas (en octubre de 2019).



ALGUNAS REFLEXIONES FINALES. CRISIS U OPORTUNIDAD

Como dijimos anteriormente, el acuerdo del gobierno argentino con el FMI comenzó en agosto de 2020. El mismo permitió el cierre con quita de deuda a los tenedores privados de la deuda pública con el organismo internacional como garante. Aunque válida, la decisión de Martín Guzmán implicó el desarrollo de una estrategia que no ensayó caminos alternativos, como un proceso de auditorías sobre la deuda, un ciclo de denuncias a organismos internacionales, y un control de los balances contables de las principales corporaciones financieras "locales" y transnacionales.

La pandemia macrista, sumada a la de COVID-19 más el conflicto bélico ponen a nuestro país ante una encrucijada histórica para sortear los embates políticos, económicos y sociales que nos azotan desde la vuelta de la valorización financiera a esta parte.

Es la decisión y el accionar político-estratégico lo que determina que sea crisis u oportunidad. En realidad, lo central pasa por definir quiénes pagan las crisis y quiénes tendrán oportunidades de resolverla a su favor.

Lo cierto es que en este escenario de guerra, convoca a establecer lazos comerciales entre los países latinoamericanos, donde se desarrollen cadenas regionales de valor, intercambiando productos que permitan a nuestras naciones establecer vínculos comerciales de nuevo tipo, productos como el gas, o el litio que se producen en Bolivia, los granos y subproductos de Argentina, plásticos y petróleo de Venezuela, es decir, buscar suplantar el lazo comercial que nos sujeta a los países en conflicto. Podría ser una oportunidad para restablecer una economía regional profundamente integrada, en red, dispuesta a autoabastecerse ante cualquier situación crítica que se presente en estos tiempos.

Es tiempo de desempolvar el Mercosur, sobre el que tanta tierra echaron Uruguay y Brasil. Junto a la UNASUR y la CELAC, un camino ya transitado por Nestor y Cristina en sus respectivas presidencias. Quienes realmente reposicionaron a nuestro país en el mundo.

Retomar el Mercosur como posible herramienta central podría tener un primer momento, el momento comercial: relacionar entramados productivos entre las empresas nacionales y, por qué no, privadas, priorizando el mercado interno regional con perspectiva latinoamericana y caribeña.

Puede ser un sueño, puede ser una utopía, pero la "realidad efectiva" también presiona-

rá sobre los gobiernos para solucionar los problemas de inflación, desabastecimiento y pobreza que acarrearán estos escenarios de las dos pandemias y una guerra.

SÍNTESIS

- Para 1995, 11.455 millones de dólares fueron fugados de Argentina, marcando un aumento del 583 % en comparación con el año anterior.
- El FMI realizó cerca de 50 misiones entre 1991 y 2002, principalmente en los sectores fiscal, monetario y bancario.
- Según un informe del BCRA, 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país entre diciembre de 2015 y 2018 tuvieron su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos.
- El Tesoro Nacional emitió hasta febrero de 2018 U\$S 108.173 millones de deuda (U\$S 76.032 millones en moneda extranjera).
- Entre agosto y octubre de 2019, se produjo una pérdida de reservas de 17.000 millones y se fugaron 23.000 millones de dólares.
- En 2019 la fuga de capitales alcanzó los U\$S 26.870 millones de dólares. Durante el período macrista, la fuga habría sido de U\$S 88.371 millones.
- “El 1% de las empresas que resultaron compradoras netas de dólares adquirió US\$ 41.124 millones en concepto de formación de activos externos y, en el caso de las personas humanas, tan sólo el 1% de los compradores acumuló US\$ 16.200 millones en compras netas durante el período, un total combinado de US\$ 57.324 millones”. Datos del BCRA.
- Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, denunció en Cuba, la deuda tomada por Macri en 2018 como insostenible e ilegítima, basada en una demostrada violación de los estatutos del Fondo y la utilización de dicha deuda sólo para la fuga de capitales.

COORDINARON ESTA PUBLICACIÓN



PAULA GIMENEZ
TWITTER
@PAULAGIMENEZ_OK



MATIAS CACIABUE
TWITTER
@MATIASCAC



@CLAEFILA



@CLAE LAT

El Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE) es un espacio de producción de conocimiento colectivo.

Dirección: Aram Aharonian



CLAE
CENTRO LATINOAMERICANO
DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO